

EL JUICIO A ALBERTO FUJIMORI EL PRESIDENTE QUE OÍA RPP

Nelson Manrique

Profesor del Departamento de Ciencias Sociales PUCP

9:15 a. m. A la entrada de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES), la cola para ingresar al recinto donde se juzga a Alberto Fujimori se mueve con relativa velocidad. Desde aquí se puede observar el movimiento de agentes policiales, algunos vehículos y personal de seguridad; nada aparatoso. Al fondo, me señalan, se encuentra el pabellón donde está recluido Fujimori. Es un edificio austero, por sobre cuyo techo se pasean dos oficiales con armas largas y uniforme de combate. Esto es una prisión efectiva. Las medidas de seguridad adoptadas parecen buenas, sin recurrir a los despliegues teatrales que tanto le gustaban a Vladimiro Montesinos cuando de exhibir a detenidos se trataba.

En la entrada se confunden los allegados de Fujimori y los familiares de las víctimas, no hay interacción entre ellos, tampoco hostilidad, solo una deliberada actitud de ignorarse.

Aunque en la entrada se confunden los allegados de Fujimori y los familiares de las víctimas, no hay interacción entre ellos, tampoco una abierta hostilidad, solo una deliberada actitud de ignorarse. Durante los primeros días del juicio, los familiares de las víctimas tenían que atravesar un callejón oscuro de manifestantes fujimoristas y «caras pintadas» que los amenazaban e insultaban.

Esto ha quedado más o menos atrás, luego de que en *La República* se publicara que el jefe de los «caras pintadas» era un oficial del ejército que participó en la operación Chavín de Huántar y que ahora trabaja en una empresa de seguridad ligada a Kenji Fujimori. Jugó también un papel importante la enérgica reacción del tribunal, que anunció que tomaría medidas drásticas si este tipo de amedrentamiento continuaba.

Hola soledad...

Posiblemente, los fujimoristas terminaron entendiendo que no les convenía la mala publicidad. La reacción que esperaban, de multitudes exigiendo la libertad del Chino cuando este arribara a Lima, no se produjo. La movilización que armaron para recibir al reo a su llegada

al aeropuerto fue neutralizada con el simple expediente de cambiar el lugar de aterrizaje del avión que lo traía de Santiago de Chile. De ahí en adelante no lograron organizar una movilización que conmoviera al sistema político o al aparato judicial del Estado.

Aunque el fujimorismo tiene un bolsón de apoyo electoral constante y una bancada de 13 parlamentarios, cuando Fujimori estaba todavía en Chile, las tres cuartas partes de los peruanos abordados por las encuestadoras se manifestaron a favor de su extradición y juzgamiento; asimismo, una amplia mayoría manifestó estar convencida de su culpabilidad.

Los mítines promovidos por Carlos Raffo al inicio, que exhibían a un Kenji desafiante, afirmando que los fujimoristas «no iban a permitir que tocan al querido Chino», se acabaron por falta de aire. Había dinero, pero faltaba respaldo. Finalmente, en Ayacucho, jóvenes manifestantes los enfrentaron cuando pensaban realizar un mitin apoteósico. El susto fue grande y ahí terminó la estrategia de confrontación.

Ahora ya no hay más manifestantes a la entrada de la DIROES. Los dos locales que los fujimoristas adquirieron en las inmediaciones, como cuartel de campaña, están vacíos y lucen el inevitable deterioro del abandono. El vecindario tampoco quiere saber nada con ellos. Apenas algún fujimorista pone *El ritmo del Chino* a través de bulliciosos parlantes, cuando los asistentes ingresan al local del juicio. En medio de tanta soledad, más que agresivo, el acompañamiento suena melancólico.

De la confrontación a la acción política

Las encuestas, por otra parte, venían mostrando un significativo respaldo popular a Keiko, que a su carisma podía añadir la simpatía espontánea que produce una hija leal defendiendo a su padre en desgracia. La estrategia de acción directa ha cedido el paso a la estrategia política. Se trata de convertirla en candidata presidencial para el 2011. El problema es que esta iniciativa saca a la luz los intereses encontrados que se han ido incubando al interior del fujimorismo y las fisuras se hacen evidentes inmediatamente: la última vez enfrentaron hasta a Keiko con el hermano de su padre, Santiago Fujimori.

Las metidas de pata de Raffo y Kenji, por otra parte, dificultan arribar a buen puerto. El reciente intento de galvanizar a sus huestes, lanzando la consigna de juntar un millón de firmas para inscribir a un nuevo partido —«Fuerza 2011»— abortó antes de empezar, cuando Kenji, cándidamente, dijo a los medios la verdad: anunció que el millón de firmas era «el pasaporte a la libertad» de Alberto Fujimori. Chau campaña.

Montesinos y Hermoza ¿Optarán por una defensa solidaria o se dispararán cada uno por su lado, cuidando su propio pellejo?

El período que viene va a ser complicado para los fujimoristas. Es imposible saber cómo se comportarán en el tribunal los socios principales de Fujimori: Nicolás de Bari Hermoza y Vladimiro Montesinos. Sin duda, en estos momentos se deben de estar produciendo febriles negociaciones detrás de los

bastidores, pero a estas alturas cada uno tiene que velar por sus intereses. Montesinos y Hermoza no deben de tener tampoco un buen recuerdo de la lealtad de su jefe: basta recordar cómo rompió con ambos. ¿Optarán por una defensa solidaria o se dispararán cada uno por su lado, cuidando su propio pellejo?

En cualquier caso, la situación supone riesgos para el proyecto «Keiko candidata». Aparentemente por cautela, han decidido alejarla del escenario por seis meses, vía su viaje a Estados Unidos para terminar sus estudios, precisamente cuando el juicio entra en su etapa crítica. La apuesta tiene sus riesgos. Puede evitarle a Keiko una exposición mediática cargada de peligros, pero abre la puerta a nuevos desastres, provocados por Kenji y Raffo, que quedan sueltos en plaza y a quienes los medios de comunicación van a buscar para que se pronuncien sobre la evolución del juicio y sus implicaciones.

Una de las mayores derrotas de Alberto Fujimori ha sido quedarse sin el apoyo de una prensa amiga. Los canales de televisión, la radio y la prensa escrita que le eran adictos le han vuelto las espaldas y hoy solo cuenta con el apoyo de *La Razón*, un impresentable periódico cuyo propietario, Wolfenson, no en vano también está internado en prisión acusado de delitos comunes.

Mientras Fujimori estuvo en Chile, el Apra se jugó por evitar su extradición y eso constituyó un punto de

convergencia fundamental con los fujimoristas. Aparentemente, los líderes apristas consideraron que el costo político de ponerse en evidencia como cómplices de la impunidad era menor que el de arriesgarse a tener a Fujimori en Lima, en un juicio público. Cuando fue evidente que la extradición era inevitable, Alan García hizo un par de tardíos desplantes, como para decir que había cumplido su deber como presidente, defendiendo los intereses del país en un juicio en el que el Estado peruano es la parte agraviada.

Así que en el momento en que Fujimori llegó a Lima, las cosas cambiaron. Keiko mostró hasta qué punto los fujimoristas no habían comprendido la magnitud del cambio cuando proclamó que «no iban a permitir que Fujimori fuera a prisión» y que, a lo más, aceptarían que estuviera en un régimen de detención domiciliaria. Internado el reo en la DIROES, Keiko y su grupo intentaron montar un escándalo, alegando que estaba alojado en condiciones inhumanas. Este argumento quedó en el ridículo cuando informes televisivos mostraron el alojamiento de Fujimori, que de hecho es mejor que la vivienda de la mayoría de los peruanos. El hecho de que en el juicio se rechazara la demanda del defensor de Fujimori de que le dieran al acusado una computadora terminó de mostrar su total impotencia para imponer condiciones.

En el Congreso, el fujimorismo intentó hacer una demostración de fuerza promoviendo la censura del premier Jorge del Castillo, pero ningún grupo quiso secundar el chantaje. En lugar de mostrar fuerza, terminaron exponiendo su debilidad, y esto anuló el margen de juego del que habían dispuesto anteriormente para negociar. Desde entonces, su soledad se ha venido acentuando.

Las declaraciones del premier Del Castillo en el juicio, en las que no solo denunció el secuestro del cual fue víctima durante el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y el propósito del gobierno fujimorista de ultimar a Alan García, sino señaló que el objetivo político del golpe fue montar un «narcoestado», muestran la magnitud del viraje. Y la pueril reacción del abogado de Fujimori, César Nakasaki, intentando meter el tema del Comando Rodrigo Franco como respuesta, mostró más su desconcierto y despecho que una respuesta políticamente razonada. Se trató de ese tipo de intervención que en lugar de reducir los daños, contribuye a agravarlos.

De vuelta a la DIROES

Antes de ingresar a la sala donde se desarrolla el juicio, se hace tiempo en los ambientes habilitados para la prensa. Están bien equipados, con dos pantallas gigantes de televisión en las que se puede ver la transmisión de lo que sucede en la sala principal. En una sala pequeña adyacente hay computadoras con acceso a Internet que los periodistas que cubren el proceso pueden utilizar.

Para ingresar a la sala del juicio es necesario pasar por una nueva revisión. Los asistentes tienen asignados previamente los asientos que van a ocupar. Las sillas están colocadas formando dos columnas, divididas por un pasillo al centro, de tal manera que, aunque están en un mismo recinto, los partidarios de los litigantes están separados.

A medida que ha ido pasando el tiempo, la cantidad de personas que venían a acompañar a Alberto Fujimori en el juicio se ha ido reduciendo. Me cuentan que los más leales, aparte de sus hijos, han sido Carlos Raffo y Luis Delgado Aparicio, mientras que otros conspicuos dirigentes de las huestes del reo, como Jorge Trelles y Jorge Morelli, que estaban presentes el día que asistí, son acompañantes eventuales. Llama la atención la presencia entre los fujimoristas de otros dos personajes que, aun vestidos de civil, tienen una inocultable facha militar. Por el ostentoso reloj de oro que porta uno de ellos, le asignaría el rango de mayor o comandante. Mis anfitriones me explican que regularmente asisten al juicio militares, en parejas, cuya identidad es un misterio. Imagino que averiguarla depararía más de una sorpresa.

El juicio está haciendo mucho por devolver credibilidad al venido a menos Poder Judicial peruano. Aunque por momentos resulta exasperante la lentitud de ciertos procedimientos y aunque subleve el cinismo de Fujimori, es imprescindible que se respeten escrupulosamente las garantías procesales, de tal manera que el juicio no pueda ser objetado por motivos formales, ni aquí ni en ningún tribunal del extranjero.

Si tuviéramos que creerle a Alberto Fujimori, aseguraríamos que él no estaba enterado de nada. Destruyó la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, concentró todo el poder en el servicio de inteligencia, convirtió a este en una cuarta arma —en pie de igualdad con el Ejército, la Marina y la Aviación—, apenas llegó al poder incrementó su presupuesto en treinta veces, todo para tener la mejor información. Pero se enteraba de lo que pasaba en el país escuchando *Radio Programas del*

Perú, leyendo *Expreso* y *La República*, mas no *Caretas*. Él, que se preciaba de controlarlo todo, hoy no estaba enterado de nada. Fujimori era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero según su versión, eran los militares los que daban órdenes, y ellos son los responsables de las violaciones de los derechos humanos que se cometieron contra sus directivas y sus muy íntimas convicciones humanistas.

Por desgracia, la coartada hace agua por todas partes. Miembros del Grupo Colina, como José Alarcón Gonzales y José Tena Jacinto, participantes en la matanza de La Cantuta y otros crímenes, han dejado establecido que es falso que la incursión en esta universidad tuviera como objetivo detener a los estudiantes sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso: los agentes llevaban picos, lampas y cal para disponer de los cadáveres. Esto echa por tierra el argumento de que la masacre no estaba planificada y fue el resultado de una decisión repentina de Santiago Martín Rivas.

Alarcón y Tena han coincidido, por otra parte, en que los altos mandos del Ejército son responsables de los operativos. Alarcón ha dicho que la creación de los comandos de aniquilamiento fue responsabilidad de Hermoza Ríos: «Tiene que haber una previa autorización del comandante general del Ejército [...] Es imposible que se firmara una orden sin su autorización». Ha narrado que él participó en cuatro operativos criminales aun antes de incorporarse al Grupo Colina. Entonces, él era el jefe de uno de los escuadrones encargados de dar protección al general Hermoza Ríos, así que va a ser difícil que este siga sosteniendo que no estaba enterado de nada.

José Tena ha involucrado directamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el diseño de los planes y estrategias que culminaron en la organización del Grupo Colina y ha afirmado que todas las informaciones de inteligencia iban directamente al Comando Conjunto y al presidente de la República. Es todo un régimen político lo que se está enjuiciando. Y aún no han declarado Hermoza y Montesinos.

Falta, sin embargo, un largo trecho por recorrer. La actual sala del tribunal tiene una gran legitimidad, tanta que el propio abogado defensor de Fujimori lo ha reconocido. Pero la historia puede ser diferente en la sala que deberá ver la apelación. En ella podrían estar presentes personajes cuestionados por su vinculación al fujimorismo, como Robinson González. Es necesario permanecer vigilantes. ■